



Defensoría
Sin defensa no hay Justicia

**EXAMEN DE EVALUACION TECNICA
DEFENSA PENAL GENERAL**

DEFENSA PENAL PÚBLICA

05 de diciembre de 2019

Nombre: _____

Rut: _____

INSTRUCCIONES GENERALES

EXAMEN EVALUACION TECNICA

1. Este examen consta de la prueba de habilitación de defensa penal general
2. La prueba contiene preguntas de alternativas y de verdadero o falso.
3. Cada pregunta tiene únicamente una respuesta correcta.
4. No se puede utilizar ningún Código, legislación o apunte de ningún tipo durante el desarrollo de este examen.
5. No hay descuento de puntaje por responder incorrectamente.
6. Este examen tendrá una duración de 120 minutos para responder la prueba de habilitación general. Por excepción, en el caso de personas con discapacidad visual este tiempos se extenderá a 180 minutos.
7. Usted dispondrá de una hoja **“HOJAS DE RESPUESTAS”** en que deberá consignar las respuestas en cada caso. Para que la corrección de la prueba sea adecuada, usted deberá llenar la alternativa correcta de cada respuesta llenando completamente el círculo que la contiene.
8. Al finalizar cada prueba usted deberá hacer entrega de la **“HOJA DE RESPUESTAS”** debidamente firmada.
9. Será responsabilidad de cada abogado haberse inscrito para la realización de la prueba en el sitio web de la Defensoría. Esto permitirá publicar su nota correctamente.
10. La aprobación de la prueba Penitenciario, ya **NO SE ENCUENTRA** supeditada a la aprobación de la parte general o encontrarse habilitado actualmente como defensor penal público.

Información relevante:

- Frente a la menor duda de que se está incurriendo en una falta por parte del asistente a rendir la prueba, ya sea, mirando una prueba que no sea la propia o buscando información en un material físico o electrónico, tendrá 1 advertencia verbal por parte del evaluador. Si se observa esta falta por segunda vez, el comité de selección ha instruido que la prueba sea marcada por el evaluador al momento de la entrega, siendo el comité quien decidirá qué acciones sancionatorias aplicará, pudiendo ser anulada la misma y quedando excluido del presente proceso de rendición del examen habilitante.

Prueba Defensa General

1. Según Cury, son causales de justificación (ausencia de antijuridicidad)

- I El consentimiento del interés protegido por la norma, en los casos en que dicho interés es susceptible de disposición.
- II La fuerza física irresistible.
- III La legítima defensa.
- IV El error de prohibición.
- V El ejercicio legítimo de un derecho

- a) I, III, IV y V
- b) I, II, III y V
- c) III y V
- d) I, III y V
- e) Todas son correctas

2. En cuanto a la aplicación de la ley penal en el tiempo, es correcto afirmar:

- I La ultractividad alude a aquella situación en que en el juzgamiento de un hecho se aplica una ley que ha entrado en vigencia con posterioridad a su realización.
- II Los principios de irretroactividad, ultractividad y la excepción de ley más beneficiosa, han sido reconocidos unánimemente por la doctrina y jurisprudencia nacional, a partir de la consagración constitucional y legal de los mismos
- III Tradicionalmente la doctrina ha afirmado que, en el proceso de aplicación de una nueva ley que contiene disposiciones más favorables al imputado, la determinación de cuál ley es más favorable, debe hacerse considerando ambas leyes (la derogada y la nueva) de manera global o total, y no seleccionando los elementos más favorables de cada una, lo que de ocurrir, significaría la creación de una tercera ley o *lex tertia*.
- IV No es unánime la posición que excluye la posibilidad de aplicar el concepto de *lex tertia* en materia penal.
- V Aunque, en materia penal, se discuten diversos criterios y situaciones para definir cuál es la disposición o ley más favorable al imputado, la tendencia unánime es que ello debe resolverse al calor de cada caso en particular.

- a) I, II, III y V
- b) I, II, IV y V
- c) I, III, IV y V
- d) II, III, IV y V
- e) Todas son correctas

3. En materia de determinación de pena, es correcto afirmar:

I No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que la ley haya expresado al describir y penar el delito que se sanciona.

II Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la ejecución material del hecho, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de sólo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes se presenten

III Si la pena señalada al delito es un grado de una divisible y concurre sólo una circunstancia atenuante, se aplicará en su máximo.

IV En la aplicación de las multas el tribunal, para determinar su cuantía, debe consultar principalmente el caudal o facultades del culpable.

V Cuando la sentencia establezca la existencia sólo de una atenuante muy calificada, sin que existan agravantes, el tribunal podrá imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito

- a) I, IV y V
- b) I, II, IV y V
- c) I, III, IV y V
- d) I y V
- e) II, IV y V

4. En materia de aplicación de las penas, es correcto afirmar lo siguiente.

I A los encubridores de crimen frustrado, se impondrá la pena inferior en tres grados a la que señala la ley para el crimen.

II Las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación mayores comprenden un tiempo que va desde los cinco años y un día hasta los veinte años.

III La multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última, en todas las escalas graduales de penas

IV A los cómplices de simple delito consumado, se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el simple delito.

V A los cómplices de crimen o simple delito frustrado, se impondrá la pena inferior en dos grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito.

- a) I, II, III y IV
- b) I, II, IV y V
- c) I, III, IV y V
- d) II, III, IV y V
- e) Todas las afirmaciones son correctas

5. En materia de legítima defensa, es correcto afirmar
- I Base de la legítima defensa es la existencia de una agresión ilegítima
 - II Al igual que el estado de necesidad, la legítima defensa es subsidiaria, es decir, el agredido está obligado a esperar que “ya no quede otra salida” para reaccionar.
 - III En la legítima defensa, sea propia, de parientes o de extraños, se presume legalmente la necesidad racional de la reacción defensiva, ya que la ley señala que esto ocurrirá “cualquiera que sea el daño que se ocasiona al agresor”
 - IV En la legítima defensa de ciertos parientes del N° 5 del artículo 10 del Código Penal, se requiere que, de haber precedido provocación de parte del acometido u ofendido, no haya tenido participación en tal provocación, el defensor.
 - V En la legítima defensa de extraños, la ley agrega como requisito que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.

- a) I, II, IV y V
- b) I, III, IV y V
- c) I y IV
- d) I, IV y V
- e) I y V

6. En cuanto a autoría y participación, es correcto afirmar.
- I Autor ejecutor, directo o de propia mano es quien, para ejecutar el hecho típico, se sirve de otro, cuya voluntad domina, y que es quien lo realiza materialmente.
 - II Es cómplice quien, no siendo autor, coopera a la ejecución del hecho, por actos simultáneos o posteriores al hecho.
 - III Para ser autor inductor es necesario actuar de manera directa, vale decir, mediante actos positivos orientados a ese objeto, en la formación de la voluntad delictuosa del autor ejecutor o directo. Así lo exige expresamente el artículo 15 N° 2 del Código Penal.
 - IV El encubridor debe obrar con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito, o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo
 - V El encubridor de su conviviente civil está exento de responsabilidad por el encubrimiento, siempre que no se haya aprovechado por sí mismo del delito ni haya facilitado al delincuente medio para que se aproveche de los efectos del delito.

- a) I, III, IV y V
- b) III, IV y V
- c) II, III, IV y V
- d) IV y V

e) III y IV

7. Es correcto afirmar que la Constitución señala explícitamente en su texto que:

I El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa.

II Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que les inhabilite para desempeñar el cargo de juez.

III El tribunal que conozca de una acción de amparo constitucional podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención.

IV Ninguna persona podrá ser condenada o penada, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial.

V Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

a) I, II, III y IV

b) I, II, III y V

c) I, III, IV y V

d) II, III, IV y V

e) Todas la afirmaciones son correctas

8. En cuanto al contenido de las garantías fundamentales, es correcto afirmar.

I La Corte Suprema ha sostenido un concepto amplio de “hogar”, enfatizando que lo protegido es la intimidad, y no la propiedad

II La Corte Suprema ha señalado que, tratándose de un delito de almacenamiento malicioso de material pornográfico infantil, la interceptación clandestina de los registros audiovisuales contenidos en el computador del imputado, hecha por un particular, sin orden judicial, es legítima porque se trata de un acto de defensa respecto de una ilicitud en marcha.

III Para la Corte Suprema, el derecho a la intimidad corporal sólo puede ser afectado por decisión del propio imputado o por orden judicial, y la ejecución de la actuación que la afecte debe garantizar el respeto a la dignidad del imputado y que no se constituya en un trato degradante

IV Para la Corte Suprema, la entrada y registro a un domicilio tiene un objeto preciso y no puede procederse más allá del ámbito autorizado por el propietario o por la orden judicial.

V La Corte Suprema, ha asentado el criterio de que la privacidad de la información contenida en determinados dispositivos (celulares, computador, etc.) atañe únicamente a los propietarios de tales bienes.

- a) I, III, IV y V
- b) I, III y IV
- c) I, II y V
- d) Todas son correctas
- e) I, III y V

9. Las siguientes afirmaciones están contenidas en la Constitución

I Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

II La resolución que apruebe u otorgue la libertad del imputado por delitos de la ley antiterrorista, requerirá ser acordada por unanimidad.

III El juez podrá, por resolución fundada, ampliar el plazo de detención hasta por cinco días en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas.

IV La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

V La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.

- a) I, II, III y IV
- b) I, II, IV y V
- c) I, III, IV y V
- d) II, III, IV y V
- e) Todas las afirmaciones están contenidas en la Constitución

10. En materia de acciones constitucionales y recursos, es correcto afirmar:

I La acción de amparo procede en favor de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual

II Quien, en virtud de un acto arbitrario es juzgado por una comisión especial, y no por el tribunal que le señale la ley, puede recurrir de protección.

III El recurso de protección se concede, entre otros, a quien por causa de acto u omisión ilegal o arbitraria, sea privado de su derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República.

IV El tribunal que conozca de la acción constitucional de amparo podrá decretar la libertad inmediata del amparado, hacer que se reparen los defectos legales o poner al individuo a disposición del juez competente.

V Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N° 7° del artículo 19, cuando la pena de confiscación de bienes sea impuesta por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

- a) I y II
- b) I y IV
- c) II y IV
- d) I,II y IV
- e) I, II, IV y V

11. Es correcto afirmar que la Constitución Política contempla explícitamente disposiciones propiamente penales acerca de:

- I La pena de confiscación de bienes
- II Establecimiento de la pena de muerte
- III Sanciones para los responsables de conductas terroristas
- IV Normas sobre concesión de indultos particulares
- V La prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal

- a) I, II, III y V
- b) I, II, IV y V
- c) I, III, IV y V
- d) II, III, IV y V
- e) Todas las afirmaciones son correctas

12. Es correcto afirmar que la Constitución Política contempla explícitamente disposiciones en materia propiamente procesal penal acerca de:

- a) Aplicación temporal de la ley procesal penal
- b) Tramitación de solicitudes de asistencia internacional
- c) Obligación de que la ley establezca las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
- d) Normas relativas a quienes pueden deducir querrela criminal.
- e) La regulación de medidas cautelares diferentes de la privación de libertad

13. Respecto de la Ley N°19.718, Orgánica de la Defensoría Penal Pública, es correcto afirmar:

- I. El Defensor Nacional debe fijar, una vez al año y con carácter de general, los estándares básicos que deben cumplir en el procedimiento penal quienes presten servicios de defensa penal pública.
- II. El Defensor Nacional en uso de la facultad de definir los estándares básicos que deben cumplir los prestadores de defensa penal pública, puede dar instrucciones para la realización de actuaciones en casos particulares.
- III. El Defensor Nacional representa judicial y extrajudicialmente a la Defensoría.
- IV. Corresponde al Defensor Nacional llevar las estadísticas del Servicio y elaborar una memoria que dé cuenta de su gestión anual.
- V. Nombrar y remover a los defensores regionales, en conformidad a la ley 19.718

- a) Sólo I; II y III
- b) Sólo III; IV y V
- c) Sólo I y II
- d) Todas son correctas.
- e) Ninguna es correcta.

14. Respecto de la Ley N°19.718, Orgánica de la Defensoría Penal Pública, es correcto afirmar:

- I. Son beneficiarios de la defensa penal pública todos los imputados o acusados que carezcan de abogado o que cuenten con un defensor particular de confianza y que igualmente requieran de un defensor público.
- II. La defensa penal pública será siempre gratuita, motivo por el cual la Defensoría no puede cobrar la defensa que preste a los beneficiarios, dispongan o no de recursos para financiarla privadamente.
- III. Los defensores penales públicos deben ejercer su función con transparencia, de manera de permitir a los defendidos el conocimiento de los derechos que les confiere la ley, así como de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las actividades que emprendan en el cumplimiento de sus funciones.
- IV. Una vez designado, el defensor penal público siempre podrá excusarse de asumir la representación del imputado o acusado.
- V. El defensor designado, antes de actuar en favor de su defendido, siempre debe autorizar poder ante el Ministro de Fe del tribunal respectivo.

- a) Sólo I; III y V
- b) Sólo II y V
- c) Sólo V

- d) Sólo III
- e) Ninguna es correcta.

15. Respecto de los delitos contemplados en la Ley N°20.000, es correcto afirmar:
- I. Los delitos de que trata esta ley se sancionarán como consumados desde que haya principio de ejecución.
 - II. El médico cirujano o veterinario u odontólogo que receten alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1° de la Ley sin que exista necesidad médica o terapéutica, será sancionado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio a máximo y multa de 40 a 400 UTM.
 - III. El que se encuentre a cargo de un cine y tolere el consumo de drogas de aquellas señaladas en el artículo 1° dentro del recinto, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 40 a 200 UTM, a menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho.
 - IV. De acuerdo a la jurisprudencia de la sala penal de la Excma. Corte Suprema, no es necesario contar con informe de pureza de droga en el caso de la cannabis sativa.

- a) I; II y IV
- b) III y IV
- c) I, II y III
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

16. Respecto del delito de atentado a la autoridad, es correcto afirmar:
- I. De acuerdo al N°1 del artículo 261 del Código Penal es requisito, entre otros, el alzarse públicamente para encontrarnos en la hipótesis prevista en este numeral.
 - II. De acuerdo al N°2 del artículo 261 del Código Penal, son sujetos pasivos entre otros, Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y personal de las Fuerzas Armadas, cuando ejercieren funciones de su cargo.
 - III. Respecto del concepto de armas con que se puede atacar a la autoridad, el artículo 262 inciso final señala taxativamente cuáles se considerarán para configurar el tipo penal.
 - IV. Respecto de la sanción de este delito y de acuerdo al artículo 262 del Código Penal, la pena será de reclusión menor en su grado medio a máximo o multa de once a quince UTM, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los numerales 1°, 2° o 3° de la disposición.

- a) I; II y III
- b) Sólo II

- c) II y IV
- d) Sólo IV
- e) Ninguna de las anteriores

17. Respecto de la Ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, es correcto afirmar:

- I. Las lesiones contempladas en el artículo 396 del Código Penal constituirán delito terrorista cuando se cometan con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.
- II. Esta ley no es aplicable a las conductas ejecutadas por menores de 18 años.
- III. La tentativa de cometer alguno de los delitos previstos en esta ley se castigará con la pena asignada al respectivo ilícito, rebajada en uno o dos grados, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3° bis de la ley.
- IV. La conspiración para cometer alguno de los delitos previstos en esta ley se castigará con la pena asignada al delito, rebajada en dos grados, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3° bis de la ley.

- a) I; II y III
- b) III y IV
- c) II y IV
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

18. Respecto de la Ley N°17.798, sobre control de armas, es correcto afirmar:

- I. Quedan sometidos al control de la ley, entre otros, los fuegos artificiales y las armas basadas en pulsaciones eléctricas, como los bastones eléctricos o de electroshock.
- II. De acuerdo a la ley, ninguna persona podrá poseer artefactos fabricados sobre la base de gases paralizantes.
- III. De acuerdo a la ley, aquella persona que teniendo la autorización correspondiente abandone un arma sujeta a control será sancionada con multa administrativa de 8 a 100 UTM, impuesta por la Dirección General de Movilización Nacional.
- IV. De acuerdo a la ley, el que colocale artefactos incendiarios en la vía pública, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado medio.

- a) I; II y III
- b) III y IV
- c) II y IV
- d) Ninguna de las anteriores
- e) Todas las anteriores

19. A propósito de la ley N° 20.066, que sanciona los actos de violencia intrafamiliar NO es correcto afirmar:
- I. El incumplimiento de cualquiera de las medidas accesorias contempladas en el artículo 9° de la ley permite al juez de garantía poner en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes pertinentes para perseguir el delito de desacato.
 - II. El juez podrá fijar prudencialmente el plazo de las medidas accesorias, las que en ningún caso pueden exceder de un año.
 - III. Constituye acto de violencia intrafamiliar el maltrato físico realizado a un pariente en tercer grado en la línea colateral del cónyuge del ofensor.
 - IV. En el delito de maltrato habitual tipificado en el artículo 14 de la Ley, debe atenderse, para configurar la habitualidad: el número de actos ejecutados, la proximidad temporal de los mismos, independientemente de si la violencia se ejerció respecto de la misma o de diferente víctima.

- a) I y II
- b) II y IV
- c) I; II y IV
- d) I y III
- e) Sólo III

20. Respecto a la declaración del imputado ante la policía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?

- I. La policía jamás puede interrogar autónomamente al imputado, ni aún en presencia del abogado defensor.
- II. Si la declaración que brinda el imputado ante la policía es prestada en presencia del abogado defensor podrá ésta ser utilizada en el correspondiente juicio oral como eventual apoyo de memoria o para demostrar posibles contradicciones, si dicho declarante brinda declaración en el curso de la audiencia de juicio oral.
- III. Si, en ausencia del defensor, el imputado manifiesta su deseo de declarar ante la policía ésta tomará las medidas para que declare inmediatamente ante el fiscal.
- IV. Si al inicio de la declaración que brinde el imputado a la policía, en presencia del fiscal, no se encuentra presente el abogado defensor, la eventual incorporación de dicho letrado a tal diligencia, una vez ya iniciada ésta, será posible sólo si el fiscal considerase aquello útil para el éxito de la diligencia.

- a) Sólo I
- b) Sólo II
- c) I y IV

d) Sólo III

e) Sólo IV

21. Respecto a la resolución denominada auto de apertura de juicio oral ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?

I. Es susceptible de apelación por parte del querellante si se hubiese excluido por el Juez de Garantía prueba de cargo en razón de considerar que ésta ha sido obtenida con inobservancia de garantías fundamentales.

II. Debe contener la indicación precisa de las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral y de aquellas que han sido excluidas durante la audiencia de preparación de juicio oral.

III. Si, por resolución firme, se excluyese la totalidad o parte fundamental de la prueba de cargo, el Ministerio Público estará habilitado para comunicar la decisión de no perseverar respecto a dicha causa.

IV. Nuestro código contempla la posibilidad de que el Juez de Garantía dicte autos de apertura separados luego de la respectiva audiencia de preparación de juicio, únicamente si existen en la causa dos o más personas acusadas.

a) Sólo I

b) Sólo II

c) Sólo III

d) III y IV

e) Ninguna de las afirmaciones es correcta

22. Respecto a la resolución que falla un recurso de nulidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?

I. Si la nulidad se acoge por haberse dado, erradamente, por probado en la sentencia impugnada determinadas circunstancias del hecho por el que se condenó, necesariamente deberán ser anulados el juicio y la sentencia, y no sólo esta última.

II. Si el recurso de nulidad es acogido en virtud de un defecto o vicio cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia dictada, no es posible que se anule el juicio oral que le ha servido de base, ordenándose que sea realizado uno nuevo.

III. Si el fallo que acoge el recurso de nulidad establece que se ha impuesto en la sentencia impugnada una pena improcedente por cuanto no correspondía aplicar pena alguna en el

referido caso, es procedente que se anule sólo la sentencia, siendo dictada por la Corte, separadamente, una nueva sentencia, de reemplazo.

IV. La Corte que conoce del recurso cuenta con quince días para fallarlo, plazo que se cuenta desde la fecha en que hubiere terminado de conocer de él.

- a) Sólo I
- b) I y III
- c) I, III y IV
- d) Sólo III
- e) Sólo IV

23. Respecto al recurso de apelación en nuestro sistema procesal penal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?

- I. Es apelable la resolución que declara inadmisibile la querella.
- II. Es apelable la resolución que revocase una suspensión condicional del procedimiento.
- III. Es inapelable la resolución que negare lugar a la solicitud del querellante de que se acepte el forzamiento de la acusación.
- IV. Es inapelable la resolución que se pronunciare sobre la petición de desafuero.

- a) I y II
- b) I, II y III
- c) II y III
- d) III y IV
- e) Todas las afirmaciones son correctas.

24. Respecto al procedimiento abreviado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas?

I. La sentencia condenatoria que se dicte en un procedimiento abreviado que trate sobre un delito de robo en lugar habitado es posible que el tribunal finalmente imponga una pena menor al autor de dicho delito que aquella establecida dentro del marco punitivo consagrado legalmente para dicha específica figura legal.

II. El querellante puede legítimamente oponerse a que una causa sea fallada en abreviado sólo si ha calificado jurídicamente los hechos materia de juicio, en su respectiva acusación particular, de un modo diverso a como lo ha hecho en la correspondiente acusación fiscal el Ministerio Público y ello ha conllevado que el querellante pida contra el acusado una pena mayor que la solicitada por la Fiscalía.

III. La sentencia que falla una causa penal en procedimiento abreviado debe resolver, asimismo, las acciones civiles que hayan sido interpuestas durante dicho proceso.

IV. Las normas del procedimiento simplificado tienen una aplicación supletoria en aquellas materias que no se encuentren expresamente reguladas para el procedimiento abreviado.

- a) Sólo I
- b) Sólo II
- c) Solo III
- d) III y IV
- e) Sólo IV

25. La proposición para cometer un crimen o un simple delito existe cuando dos o más personas se concertan para la ejecución del crimen o simple delito.

V ___ F ___

26. Está exento de responsabilidad criminal el que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o insuperable.

V ___ F ___

27. Es circunstancia agravante ser integrante de la barra brava de un club de fútbol profesional.

V ___ F ___

28. Tratándose de la pena de presidio perpetuo calificado, no se podrá conceder la libertad condicional al condenado, sino una vez transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva.

V ___ F ___

29. No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes, de tal manera inherente al delito, que sin la concurrencia de ella, no puede cometerse.

V ___ F ___

30. La acción penal prescribe, respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en diez años.

V ___ F ___

31. Conforme al artículo 21 de la Constitución, la acción constitucional de amparo debe ser interpuesta dentro de los 10 días siguientes a la actuación que prive, perturbe o amenace la libertad de una persona.

V ___ F ___

32. En nuestra Constitución Política se encuentra expresamente garantizado el derecho a contar con un abogado defensor, proporcionado por el Estado, de manera total y absolutamente gratuita para el imputado

V ___ F ___

33. Conforme a la Constitución, si una ley establece una pena, esa misma ley debe describir expresamente la conducta que se pena

V ___ F ___

34. Conforme a la Constitución, puede ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

V ___ F ___

35. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

V ___ F ___

36. La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley orgánica constitucional.

V ___ F ___

37. La duración de las penas privativas de libertad de los adolescentes, en ningún caso podrá exceder de 5 años.

V ___ F ___

38. La introducción a un lugar habitado mediante engaño es una hipótesis ficta de intimidación que configura el delito de robo en lugar habitado.

V ___ F ___

39. En el aborto consentido únicamente puede actuar como sujeto activo la mujer embarazada

V ___ F ___

40. No existe reconocimiento jurisprudencial que exija para condenar, peligro concreto para el bien jurídico protegido por la ley 20.000.-

V ___ F ___

41. El monitoreo telemático contemplado en la ley 18.216, sólo puede decretarse en la pena sustitutiva denominada Libertad Vigilada Intensiva.

V ___ F ___

42. La ley 18.314, sobre conductas terrorista se aplica en contra de toda persona, incluidos los menores de edad.

V ___ F ___

43. El juez de garantía puede ordenar la realización de una diligencia investigativa al Ministerio Público, si en el curso de la declaración judicial que el imputado presta como medio defensa, éste o su defensor, solicitan tal diligencia y el tribunal estima que la realización de la misma resulta necesaria en miras a un adecuado ejercicio de la defensa y un efectivo respeto del principio de objetividad.

V ___ F ___

44. En todo evento el examen corporal que, como diligencia investigativa, se pretenda practicar en la persona del imputado, requiere para su validez la correspondiente autorización judicial previa.
V ___ F ___
45. El auto de apertura de juicio oral en cuanto niega lugar a una solicitud de exclusión de prueba sólo es apelable por el Ministerio Público.
V ___ F ___
46. El sistema legal chileno consagra la incapacidad de ciertas personas para desempeñar las funciones de perito en un determinado juicio.
V ___ F ___
47. Todas las resoluciones dictadas por un Tribunal Oral en lo Penal son apelables.
V ___ F ___
48. Conforme a la regulación del Código Procesal Penal el enjuiciamiento de toda falta penal debe someterse a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio según la naturaleza de la pena que se pretenda por parte del Ministerio Público.
V ___ F ___
49. El monitoreo telemático establecido en la Ley 18.216, se puede utilizar para supervisar la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva y ciertas medidas cautelares.
V ___ F ___
50. Las medidas cautelares en materia de Violencia Intrafamiliar se someten a las mismas reglas que las contenidas en el Código Procesal Penal en cuanto a la oportunidad procesal para su imposición.
V ___ F ___
51. Si bien, el artículo 4° de la ley 20.000 contempla el delito denominado en doctrina como Microtráfico, la norma no determina qué debe entenderse por “pequeñas cantidades” de droga, y por ello su determinación es de resorte judicial y no legal.
V ___ F ___

52. Lo que califica un delito como "terrorista" son las consecuencias más o menos lesivas que produzca el mismo y no la finalidad que se busca con él.

V ___ F ___

53. Pedro, manipulando negligentemente un arma de fuego, que no tenía inscrita, dispara accidentalmente a Juan causándole la muerte. Pedro, sólo puede ser sancionado por el cuasidelito de homicidio de Juan, el cual subsume el desvalor de la conducta de portar un arma no inscrita.

V ___ F ___

54. La negativa injustificada de un conductor a someterse a las pruebas respiratorias u otros exámenes científicos destinados a establecer la presencia de alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el cuerpo, constituye únicamente presunción simplemente legal de estar bajo los efectos de tales sustancias.

V ___ F ___

55. Para poder sancionar a un adolescente con una amonestación, debe asumir su responsabilidad en la infracción cometida.

V ___ F ___

56. La libertad asistida en cualquiera de sus formas tiene un límite máximo de 3 años y un día de duración.

V ___ F ___

57. Las faltas, por regla general, no son punibles cuando están frustradas o tentadas.

V ___ F ___

58. La suspensión de los efectos de la imposición de una condena, procede respecto de simples delitos y faltas.

V ___ F ___

59. El monitoreo telemático contemplado en la ley 18.216, es procedente respecto de medidas cautelares establecidas en la ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.

V ___ F ___

60. El plazo máximo que puede permanecer abierta una investigación seguida en contra de un adolescente se rige por las reglas generales, esto es, dos años.

V ____ F ____